

FH/2006

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Madrid

LIBRERIA ANTICUARIA

Jerez

c/. Diana, bloque 10, puerta 3
Teléfono 666 15 36

RIVAS-VACIAMADRID
28520 MADRID

FM/2006

400

Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid

L^c Aut. Venej

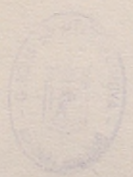
10/90

Ayuntamiento de Madrid



5002 / M7

2002 / M7



**Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid**

**Estatuto
de Autonomía
de la Comunidad
de Madrid**

Estudio preliminar, notas e índice

por

Enrique Orduna Rebollo

R. 197327

Instituto de Estudios
de Administración Local

Madrid - 1984

Ayuntamiento de Madrid

Estado de Autonomía
de la Comunidad de Madrid

ESTUDIO PRELIMINAR

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

Estudio preliminar, notas e índice
por

Enrique Orduña Rebollo

R/197.227

**Instituto de Estudios
de Administración Local**

Madrid - 1984

Ayuntamiento de Madrid



Estaduto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

Estudio preliminar, notas e índices
por
Enrique Orduña Rebollo

© 1984 Estudio Preliminar
Enrique Orduña Rebollo

ISBN: 84-7088-370-4

Depósito legal: M. 17.173-1984

Closas-Orcoyen, S. L. Polígono Igarsa
Paracuellos del Jarama (Madrid)

Ayuntamiento de Madrid

ESTUDIO PRELIMINAR

I. INTRODUCCION

Tiene el lector en sus manos el Estatuto de Autonomía de Madrid. Aunque habitualmente en documentos análogos de esta serie de Estatutos, editados por el IEAL, la Introducción tiene un carácter marcadamente histórico, aspecto que no se da en esta ocasión, sí parece obligado, por la trascendencia que en el futuro va a tener esta Comunidad en el Estado de las Autonomías, realizar unas breves notas que ayuden al usuario a fijar y determinar diversos conceptos y antecedentes inmediatos.

Al diseñarse el mapa autonómico, meses después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se configuraba una periferia y un territorio central que desde el puerto de Pajares al desfiladero de Despeñaperros constituía el núcleo de la España interior. Tradicionalmente se había denominado

León y Castilla (Vieja y Nueva) a este territorio.

Por su extensión y otras razones socioeconómicas, se articularon dos Entes Preautonómicos: Castilla y León, del que posteriormente se excluirían las tradicionalmente vinculadas a la misma Rioja y Cantabria, al optar éstas por una autonomía uniprovincial, y Castilla-La Mancha, que integraban la provincia de Albacete. Pero ya entonces quedó planteado el problema de Madrid en términos de su adscripción a una de ellas o de atribución a la provincial central como se perfilaba en ocasiones.

Desde el siglo XVII Madrid ha sido inscrito en la región de Castilla la Nueva, pero no hay que ignorar que amplios territorios de su provincia actual pertenecieron desde la Edad Media a la jurisdicción de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia (1). Por otro lado, la aglomeración urbana madrileña, con todas las ventajas e inconvenientes que ello lleva consigo, constituía un factor claramente diferencial por su clara posición de atracción donde convergen importantes corrientes demográficas, económicas, amén de las políticas, de las provincias circundantes de las dos Castillas. Respecto a su fuerza demográfica, pensemos que junto al Municipio de la Villa encontramos Lega-

(1) Cfr. Lozoya, Valdemoro, Chinchón, El Escorial, Navalcarnero, etc. Téngase en cuenta el definitivo estudio de MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, *Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana*, Madrid, 1983.

nés (la tercera ciudad castellana después de Madrid y Valladolid), Móstoles, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Parla, Getafe, etc., lo que en definitiva constituye una población superior a la de diversas Comunidades Autónomas en funcionamiento, concretamente la tercera de las diecisiete.

Otra cuestión de interés a tener en cuenta es la capitalidad del Estado que ostenta Madrid, reconocida en el artículo 5.º de la Constitución. Tal situación tiene sus antecedentes en el siglo XVI y así se ha mantenido, con algunas interrupciones, hasta nuestros días.

En efecto, la Corte de Carlos V estuvo habitualmente en Valladolid y sería Felipe II el que la trasladó a Madrid en 1559. Así, hasta el 10 de enero de 1601, en que se anunció el traslado oficial de la Corte nuevamente a Valladolid, siendo rey Felipe III. Este paréntesis duraría hasta marzo de 1606, en que los reyes volvieron a Madrid definitivamente, institucionalizándose la capitalidad (2).

Existieron diversas especulaciones sobre el particular, principalmente al concluir la guerra civil. Pero no hay que olvidar que aunque el gobierno de la República se trasladó a Valencia en el otoño de 1936, cierto es que Madrid era un símbolo y que su posesión iba a jugar el papel definitivo tanto desde un punto de vista militar como internacional y político.

En la posguerra son reconocidos algunos in-

(2) V. AGUADO BLEYER, P., *Manual de historia de España*, vol. II, Madrid, 1964, págs. 702 y sigs.

tentos, que al parecer no superaron la fase de propuesta, de trasladar la capitalidad del Estado a Sevilla u otras ciudades. Fueron propósitos que hay que inscribirlos en los radicalismos del momento.

Todo ello, unido a la institucionalización de las autonomías uniprovinciales y a la determinación del artículo 5.º de la Constitución sobre la capitalidad del Estado, asignada a la villa de Madrid, avalaban la pertinencia de un régimen propio, distinto y diferenciado jurídicamente de las dos Comunidades castellano-leonesa y castellano-manchega.

Diversas fórmulas se apuntaban, aunque no debe confundirse con la posibilidad de dotar a Madrid, como capital del reino, de un régimen especial o con una estructura análoga a los Distritos Federales de otros países. En este caso no existía viabilidad, ya que no estamos ante un Estado Federal, aunque solventes autores lo definan como «cuasi federal». Respecto a la primera de las cuestiones apuntadas, hay que pensar que sólo afecta a lo que constituye estrictamente el Municipio de Madrid.

Pero hay más, los límites territoriales se identifican con la provincia. Un importante volumen de población habita fuera del término municipal de Madrid y los Municipios del cinturón que rodean a la capital y que constituyen el Área Metropolitana; en definitiva, todos ellos son factores que constituían un claro soporte para configurar una Comunidad Autónoma uniprovincial.

En consecuencia, esta situación, sus causas y soluciones están resumidas en el pensamiento expuesto por García de Enterría en su prólogo al estudio sobre Madrid: «El autonomismo de Madrid tiene, pues, el contenido común de todos los autonomismos, pero, además, están en él presentes, con singular fuerza, dos temas específicos: el carácter de área metropolitana cualificada que presenta toda la provincia y la significación de Madrid como capital del Estado» (3).

II. EL PROCEDIMIENTO

Hubo dificultades a la hora de establecer el procedimiento de acceso a la autonomía, ya que mientras el artículo 144.a) de la Constitución parecía el indicado a propósito del caso madrileño para acceder a su autonomía, no había total acuerdo sobre el particular y además hay que tener en cuenta que tampoco existía un régimen preautonómico.

La elaboración del Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomía en mayo de 1981 y fundamentalmente los Acuerdos Autonómicos de aquel verano, suscritos entre el gobierno de UCD y el partido de la oposición PSOE, fueron definitivos para establecer el

(3) V. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *Madrid. Comunidad Autónoma Metropolitana*. Dirigido y prologado por... Madrid, IEE, 1983, pág. 14. Estudio imprescindible para comprender y profundizar en la cuestión autonómica de Madrid.

proceso. En los referidos Acuerdos se configuraba el mapa autonómico y en él constaba Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial, estableciéndose también el procedimiento para constituirse como tal y que textualmente era el siguiente:

1.º La Diputación adoptará el acuerdo de que la provincia de Madrid se constituya en Comunidad Autónoma provincial, según lo previsto en el artículo 144.a) de la Constitución, y los partidos políticos presentes en la Diputación formalizarán, a tal efecto, la correspondiente proposición de ley ante las Cortes Generales.

2.º Los Municipios de la provincia solicitarán la autonomía y la elaboración del Estatuto, todo ello por la vía del artículo 145 de la Constitución.

3.º El Estatuto así elaborado se someterá a la aprobación de las Cortes Generales mediante la correspondiente Ley Orgánica (4).

La proposición de ley prevista en el párrafo primero tuvo su entrada en las Cortes el día 23 de marzo de 1982 y mediante la autorización contenida en la Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio, se ponía definitivamente en marcha el proceso autonómico que, iniciado por la Diputación Provincial de Madrid, acabaría en la configuración de la Autonomía prevista en el artículo 143 de la Constitución.

(4) Acuerdos Autonómicos de 1981, Madrid, Presidencia del Gobierno, 1981, págs. 16-17.

Más costoso fue cumplimentar lo previsto en el párrafo segundo de los Acuerdos Autonómicos, por las vacilaciones y rémoras de los Ayuntamientos. Finalmente, el 18 de diciembre de 1981, y faltando pocos días para cumplirse el plazo de seis meses establecido en el artículo 143 de la Constitución para que los Municipios ratificasen la iniciativa autonómica de la Diputación Provincial, se alcanzaron los dos tercios previstos en el número de Municipios que se declaraban partidarios de la autonomía.

Contando con las dos premisas requeridas en los párrafos primero y segundo de los Acuerdos Autonómicos, se procedió a la redacción de un texto estatutario en un plazo de treinta días aproximadamente, pues el referido texto apareció en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 31 de agosto de 1982. Pero aquel mismo día se disolvieron las Cortes y, en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 207 del Reglamento del Congreso, el Proyecto de Estatuto quedó caducado.

Al constituirse las nuevas Cortes surgidas de las elecciones generales de octubre de 1982, el Gobierno del PSOE, dispuesto a llevar a buen fin el proceso autonómico pendiente y concluir el mapa autonómico de España en el primer cuatrimestre de 1983 (5), presentó un

(5) Recuérdesse que el Informe de la Comisión de Expertos recomendaba en los «Acuerdos políticos», epígra-



nuevo Proyecto de Estatuto de Autonomía, aparecido en el «Boletín Oficial de las Cortes» del día 3 de diciembre de 1982. El Proyecto coincidía sustancialmente con el periclitado al disolverse las Cámaras, incluyendo incluso algunas imperfecciones subsanadas posteriormente (6).

El Proyecto de Estatuto, que tenía fecha del día anterior, 2 de diciembre, tuvo un plazo de presentación de enmiendas hasta el 22 del mismo mes. La Ponencia emitió informe el 17 de enero de 1983 (7). El dictamen de la Comisión se realizó el 20 de enero, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes» de 24 del mismo mes. El Proyecto pasó al Pleno del Congreso y fue aprobado en la sesión del día 25 de enero.

Tuvo entrada en el Senado el 31 del mismo mes y, declarado urgente el Proyecto de Ley, el plazo de presentación de enmiendas terminó el 4 de febrero y se publicó en el «Boletín del Senado» del 8 de febrero. El Informe de la Ponencia se emitió el 9 de febrero y el dictamen de la Comisión de Autonomías y Or-

fe 3.º, que «en el año 1983 deben estar aprobados todos los Estatutos de Autonomía».

(6) V. PIÑAR MAÑAS, J. L., *Madrid y su encuadre en el Estado de las autonomías* (en GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *Madrid. Comunidad Autónoma Metropolitana*), Madrid, IEE, 1983, págs. 35 y sigs.

(7) «BOCG», Congreso de los Diputados, 15 de enero de 1983, núm. 5-I-1 (hacemos notar el error de fechas, pues el «BOCG» es de dos días antes que la fecha del informe).

ganización y Administración Territorial el día 12 de febrero.

En el Senado se aprobaron diversas enmiendas que afectaron a los artículos 10, 27, 29, 31 y 34, así como a la rúbrica del Título IV, a la Disposición adicional segunda y a la Disposición transitoria cuarta. Estas modificaciones respondían a razones diversas, como corrección de estilo, clasificación en la redacción o completar omisiones observadas (8).

Vuelto el Proyecto al Congreso, se publicaron las enmiendas aprobadas por el Senado, así como el mensaje motivado de la Cámara Alta en el «Boletín» del 21 de febrero. En la sesión del día siguiente, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con lo que se culminaba el proceso autonómico madrileño.

III. CONCLUSION

Nuestro propósito de sintetizar bajo una óptica descriptiva los antecedentes y el proceso de tramitación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ha quedado, suponemos, cumplido. Hemos tenido como fin dotar al lector de los medios de información y documentación que le permitan conocer los ante-

(8) V. PIÑAR MAÑAS, J. L., *Madrid y su encuadre...*, op. cit., pág. 38.

cedentes del problema objeto de nuestro estudio y que pueda, en consecuencia, formar el oportuno juicio.

Al igual que en otras ocasiones, hemos intercalado los artículos de la Constitución que hacen referencia a los del texto estatutario.

ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEY ORGANICA 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.º

1. El pueblo de la provincia de Madrid, de acuerdo con la voluntad mani-

festada por sus legítimos representantes en el ejercicio del derecho de autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco del Estado español, que expresa la unidad indisoluble de la Nación española.

El artículo 2 de la Constitución española (en lo sucesivo CONS-78) dice así: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»

El artículo 143.1 de CONS-78 dice así: «En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.»

También el artículo 147.1 de CONS-78 dice así: «Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.»

2. La Comunidad Autónoma de Madrid se constituye con la denominación de Comunidad de Madrid.

Véase el artículo 143.1 de CONS-78, ya citado.

También el artículo 147.2.a) de CONS-78 dispone entre los preceptos que debe contener el Estatuto de Autonomía: «La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.»

3. La Comunidad de Madrid, al facilitar la más plena participación del pueblo de Madrid en la vida política, económica, cultural y social, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España.

Véase el artículo 2 de CONS-78, ya citado.

Artículo 2.º

El territorio de la Comunidad Autónoma es el de los municipios comprendidos dentro de los límites administrativos de la provincia de Madrid.

El artículo 147.2.b) de CONS-78 dice: «La delimitación de su territorio.»

Véase también el artículo 143.1 de CONS-78, ya citado.

Artículo 3.º

1. La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en municipios, que gozan de plena personalidad jurídica y autonomía para la gestión de los intereses que les son propios.

El artículo 137 de CONS-78 dice: «El Estado se organiza territorialmente en Municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.»

También el primer párrafo del artículo 140 de CONS-78 dice así: «La Constitución garantiza la autonomía de los Municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.»

2. Los municipios podrán agruparse con carácter voluntario para la gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de carácter funcional o territorial, de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad, en el marco de la legislación básica del Estado.

Téngase en cuenta el epígrafe siguiente.

3. Por Ley de la Asamblea de Madrid se podrán establecer, mediante la agrupación de municipios limítrofes, circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

El artículo 152.3 de CONS-78 dice así: «Mediante la agrupación de Municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.»

Artículo 4.º

La Comunidad establecerá, mediante Ley, su bandera, escudo e himno propios.

El artículo 4.2 de CONS-78 dice así: «Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.»

Artículo 5.º

La sede de las instituciones de la Comunidad es la villa de Madrid. Por Ley de Comunidad, aprobada por mayoría absoluta, podrán localizarse algunos or-

ganismos, servicios o dependencias en otro lugar del territorio.

El artículo 147.2.c) de CONS-78 determina entre los contenidos de los Estatutos de Autonomía: «La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.»

Artículo 6.º

La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las Instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias.

El artículo 5 de CONS-78 dice así: «La capital del Estado es la villa de Madrid.»

Artículo 7.º

1. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución.

El artículo 14 de CONS-78 dice así: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

Y en general toda la sección primera del capítulo 2.º de CONS-78, dedicado a los derechos y las libertades. También el artículo 30 de CONS-78 dice así: «1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.»

Finalmente, véanse todos los artículos restantes de la sección segunda hasta el 38 de CONS-78, correspondiente a los derechos y deberes de los ciudadanos.

2. A los efectos del presente Estatuto gozan de la condición política de ciudadano de la Comunidad los españoles que, de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios.

El artículo 13.2 de CONS-78 dice así: «Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de recipro-

ciudad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.»

3. Podrán gozar de los derechos políticos definidos en este Estatuto los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente consulado, así como sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitasen en la forma que determine la legislación del Estado.

Artículo 8.º

1. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobierno: la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Comunidad.

2. Las Leyes de la Comunidad de Madrid regularán el funcionamiento de estas instituciones, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto.

El artículo 148.1.1.^a de CONS-78 dice: «Organización de sus instituciones de autogobierno.»

TITULO I

De las Instituciones y Gobierno de la Comunidad

CAPITULO I

De la Asamblea de Madrid

Artículo 9.º

La Asamblea de Madrid, órgano legislativo y representativo del pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa, aprueba y controla el Presupuesto, impulsa, orienta y controla la acción del Consejo de Gobierno y ejerce las competencias que le atribuyen la Constitución, este Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico.

El artículo 152.1 de CONS-78, en su primer párrafo, aunque previsto para los Estatutos de Autonomía elaborados a partir del artículo 151, dice así: «1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con

funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.»

Artículo 10

1. La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, en el supuesto previsto en el artículo 18.5 del presente Estatuto.

2. La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.

3. La elección se realizará por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

4. Los Diputados no estarán ligados por mandato imperativo.

5. Los Diputados no percibirán una

retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas que se determinen por su ejercicio.

Artículo 11

1. La circunscripción electoral es la provincia.

2. Las elecciones serán convocadas por el Presidente de la Comunidad.

3. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Una Ley de la Asamblea de Madrid establecerá el procedimiento electoral a seguir.

4. Para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.

5. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y los sesenta días posteriores a la expiración del mandato. Sus Diputados deberán ser convocados para la sesión constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco días siguientes a la proclamación de los resultados electorales.

6. Serán electores y elegibles todos los madrileños mayores de dieciocho años de edad que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho de voto a los madrileños que se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid.

Artículo 12

1. Una Ley de la Asamblea regulará las causas de incompatibilidad e inelegibilidad para las elecciones de la misma.

2. Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 66.3 de CONS-78 determina que «las Cortes Generales son inviolables».

3. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad sino en el caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior

de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. La adquisición de la condición plena de Diputado requerirá la presentación de la promesa o juramento de acatamiento de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía.

Artículo 13

1. La Asamblea elegirá entre sus miembros al Presidente, la Mesa y la Diputación Permanente.

2. La Asamblea se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación y reforma serán sometidas a una votación final sobre su totalidad, que requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los Diputados.

3. La Asamblea funcionará en Pleno y Comisión.

4. La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. En el primer supuesto se reunirá durante un máximo de cuatro meses al año, en dos períodos de sesiones, comprendidos en-

tre septiembre y diciembre el primero y entre febrero y junio el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su Presidente, con especificación, en todo caso, del orden del día, a petición del Consejo de Gobierno, de la Diputación Permanente, de una cuarta parte de los Diputados o del número de Grupos Parlamentarios que el Reglamento determine.

5. El Reglamento de la Asamblea determinará las relaciones entre ésta y el Consejo de Gobierno, la composición y funciones de la Diputación Permanente, los períodos ordinarios de sesiones, el número mínimo de Diputados para la formación de los Grupos Parlamentarios y el procedimiento legislativo, las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento de elección de los Senadores representantes de la Comunidad de Madrid. Los Grupos Parlamentarios participarán en las Comisiones y Diputación Permanente en proporción al número de sus miembros.

6. Entre los períodos de sesiones ordinarias, en los supuestos de expiración del mandato y de disolución de la Asam-

blea, funcionará una Diputación Permanente. Su procedimiento de elección, composición y atribuciones será regulado por el Reglamento. Reunida de nuevo la Asamblea, la Diputación Permanente rendirá cuenta de los asuntos tratados y decisiones adoptadas.

7. El Reglamento regulará la publicidad de las sesiones y los quórum y las mayorías requeridas. En todo caso, para la deliberación y adopción de acuerdos, la Asamblea ha de estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros si el Estatuto, el Reglamento o las Leyes no exigen otras mayorías más cualificadas.

Artículo 14

Corresponde, en todo caso, a la Asamblea:

1. El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma.

Véase el artículo 152.1 de CONS-78, ya citado.

2. El ejercicio de la potestad legislativa para el desarrollo de las leyes esta-

tales que le corresponda, así como el de las facultades normativas atribuidas a la misma, en su caso, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución.

El artículo 150.1 y 2 de CONS-78 dice así:
«1. Las Cortes Generales, en materias de competencia, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.»

3. El control de la acción del Consejo de Gobierno.

4. La aprobación de los Presupuestos y de las cuentas de la Comunidad.

5. El conocimiento de los planes económicos.

6. La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad.

7. El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma.

8. La potestad de establecer y exigir tributos.

9. La elección del Presidente del Consejo de Gobierno.

Véase el artículo 152.1 de CONS-78, ya citado.

10. Interponer el recurso de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El artículo 161.1 de CONS-78 dice así: «1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el ar-

título 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.»

11. Solicitar del Gobierno de la nación la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

12. La designación de los Senadores que han de representar a la Comunidad, según lo previsto en el artículo 69.5 de la Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos políticos representados en la Asamblea.

Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de miembros de la Asamblea de Madrid.

El artículo 69.5 de CONS-78 dice así: «Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los

Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.»

13. Ratificar los convenios que la Comunidad concluya con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. Dichos convenios serán comunicados de inmediato a las Cortes Generales.

El artículo 145.2 de CONS-78 dice así: «Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.»

14. Ratificar los acuerdos de cooperación que sobre materias distintas a las mencionadas en el número anterior convenga la Comunidad con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Véase el anteriormente citado artículo 145.2 de CONS-78.

15. Las que se deriven del presente Estatuto y del Reglamento.

Artículo 15

1. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Consejo de Gobierno, en los términos previstos en el Reglamento.

2. Por Ley de la Asamblea se podrá regular el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos para aquellas materias que pertenezcan al ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid.

El artículo 87.3 de CONS-78 dice así: «Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.»

Artículo 16

La Asamblea ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración de leyes. Esta potestad sólo será delegable en el Consejo de Gobierno, en términos idénticos a los que para el supuesto de dele-

gación de las Cortes Generales al Gobierno establecen los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.

Los artículos 82, 83 y 84 de CONS-78 dicen así:

«Artículo 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia

de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.»

«Artículo 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.»

«Artículo 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.»

CAPITULO II

Del Presidente de la Comunidad de Madrid

Artículo 17

1. El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma, sin per-

juicio de lo que se prevea en la Ley a que se refiere el artículo 6.º del presente Estatuto; preside y dirige la actividad del Consejo de Gobierno, designa y separa a los Consejeros y coordina la Administración.

2. El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Gobierno.

3. El Presidente es responsable políticamente ante la Asamblea.

Véase el artículo 152.1 de CONS-78, ya citado.

Artículo 18

1. Después de cada renovación de la Asamblea, y en los demás supuestos en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad, el Presidente de la Asamblea, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Asamblea, propondrán a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia de la Comunidad.

2. El candidato propuesto, conforme

a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante la Asamblea el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Asamblea.

3. Si la Asamblea otorgare por mayoría absoluta su confianza a dicho candidato, el Rey procederá a nombrarle Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones.

6. El mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el primero.

Artículo 19

1. El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Asamblea la cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

2. Si la Asamblea negara su confianza, el Presidente de la Comunidad de Madrid presentará su dimisión ante la Asamblea, cuyo Presidente convocará en el plazo máximo de quince días la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el procedimiento del artículo 18.

Artículo 20

1. La Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá de ser propuesta, al menos, por un 15 por 100 de los

Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

2. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por la Asamblea, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

3. Si la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente de la Comunidad de Madrid presentará su dimisión ante la Asamblea y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Comunidad de Madrid.

CAPITULO III

Del Consejo de Gobierno

Artículo 21

1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la política de la

Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones ejecutivas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea.

2. El Consejo de Gobierno estará compuesto por el Presidente y los Consejeros, cuyo número no podrá exceder de diez. De entre los Consejeros podrá nombrarse uno o más Vicepresidentes.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno serán nombrados y cesados por el Presidente. Para ser miembro del mismo no será preciso reunir la condición de Diputado, salvo en el supuesto de los Vicepresidentes.

Artículo 22

1. El Presidente y los Consejeros no podrán ejercer otras actividades laborales, profesionales o empresariales que las derivadas del ejercicio de su cargo. El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el Estatuto de sus miembros será regulado por Ley de la Asamblea de Madrid.

2. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.

Artículo 23

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones a la Asamblea en los casos de pérdida de la cuestión de confianza y de moción de censura, dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno.

Artículo 24

1. La responsabilidad penal del Presidente del Consejo de Gobierno y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los Consejeros para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el

Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.

2. Ante los mismos Tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.

TITULO II

De las competencias de la Comunidad

Artículo 25

1. La Comunidad de Madrid tendrá potestad legislativa en las siguientes materias:

Véase el artículo 150.1 de CONS-78, ya citado.

a) En las que se determinen en este Estatuto como de competencia plena de la Comunidad de Madrid.

b) Las que pudieran corresponderle en el desarrollo legislativo de las bases aprobadas por las Cortes Generales cuando se atribuya por aquéllas esta competencia a las Comunidades Autónomas.



mas o, específicamente, a la de Madrid, o bien se establezca esta potestad en el presente Estatuto.

Véase el ya citado artículo 150.2 de CONS-78.

c) Las que asuma, transcurridos cinco años desde la aprobación de este Estatuto, y previa reforma del mismo, en el desarrollo de aquellas materias cuyos principios o bases están reservados en exclusiva al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución.

d) Transcurridos cinco años desde la aprobación de este Estatuto, y previa reforma del mismo, sobre aquellas materias no atribuidas expresamente al Estado, por el artículo 149.1 de la Constitución.

e) Sobre aquellas materias de titularidad estatal que, siendo por su propia naturaleza susceptibles de transferencia o delegación, sean transferidas a las Comunidades Autónomas, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, mediante la correspondiente Ley Orgánica.

Véase el ya citado artículo 150.2 de CONS-78.

2. La Comunidad de Madrid tendrá potestad reglamentaria:

a) En aquellas materias que en virtud de este Estatuto o de Ley aprobada por las Cortes Generales corresponda a la Comunidad la potestad legislativa plena o de desarrollo.

b) Cuando se le atribuya esta potestad en el presente Estatuto.

c) Cuando se le atribuya esta potestad mediante Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales.

d) Para la organización de aquellos servicios de titularidad estatal cuya ejecución, administración, gestión o inspección corresponde a la Comunidad de Madrid.

3. La Comunidad de Madrid tendrá la función ejecutiva:

a) Para la administración, gestión o inspección de todos los servicios cuya titularidad legislativa o reglamentaria corresponda a la Comunidad Autónoma.

b) Para la administración, gestión o inspección de aquellos servicios que se determinen en este Estatuto.

c) Para el ejercicio de aquellas potestades de titularidad estatal que le hayan sido transferidas o delegadas por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

Véase el artículo 150.1 y 2 de CONS-78, tantas veces citado.

Artículo 26

Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función legislativa en las siguientes materias:

El artículo 142.2.d) de CONS-78, al determinar el contenido de los Estatutos de Autonomía, dice así: «Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.»

1. La organización de sus instituciones de autogobierno.

El artículo 148.1.1.^a de CONS-78 determina que entre las materias cuyas competencias podrán asumir las Comunidades Autónomas se encuentra la «organización de sus instituciones de autogobierno».

2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio.

El artículo 148.1.2.^a de CONS-78 dice así:
«Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.»

3. La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

El artículo 148.1.3.^a de CONS-78 dice así:
«Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.»

4. Las obras públicas de interés de la Comunidad dentro de su propio territorio.

El artículo 148.1.4.^a de CONS-78 dice así:
«Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.»

5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

El artículo 148.1.5.^a de CONS-78 dice así:
«Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.»

Ayuntamiento de Madrid

6. Los puertos lacustres y aeropuertos deportivos, así como los que no desarrollen actividades comerciales.

El artículo 148.1.6.^a de CONS-78 dice así: «Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.»

7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

El artículo 148.1.7.^a de CONS-78 dice así: «La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.»

8. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad, las aguas minerales y termales.

El artículo 148.1.10.^a de CONS-78 dice así: «Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.» También el artículo 149.1.12.^a de CONS-78 dice: «La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuan-

do su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.»

9. La pesca que pueda realizarse en el ámbito territorial de la Comunidad. La caza y la acuicultura.

El artículo 148.1.11.^a de CON-78 dice: «La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.»

10. Ferias interiores, incluidas las exposiciones.

El artículo 148.1.12.^a de CONS-78 determina las «ferias interiores» como materia cuyas competencias pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas.

11. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

El artículo 148.1.13.^a de CONS-78 dice: «El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.»

12. La artesanía.

El artículo 148.1.14.^a de CONS-78 dice: «Artesanía.»

13. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de música, servicios de bellas artes y demás centros de depósito cultural o colecciones de naturaleza análoga de interés para la Comunidad de Madrid que no sean de titularidad estatal.

El artículo 148.1.15.^a de CONS-78 dice así: «Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.»

También el artículo 149.1.28.^a de CONS-78 dice: «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.»

14. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad.

El artículo 148.1.16.^a de CONS-78 dice: «Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.»

Véase también el artículo 149.1.28.^a de CONS-78, citado en el epígrafe anterior.

15. El fomento de la cultura y la investigación.

El artículo 148.1.17.^a de CONS-78 dice: «El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.»

Asimismo el artículo 149.2 de CONS-78 dice así: «Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.»

16. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

El artículo 148.1.18.^a de CONS-78 dice así: «Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.»

17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

El artículo 148.1.19.^a de CONS-78 dice así: «Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.»

18. Asistencia social.

El artículo 148.1.20.^a de CONS-78 determina la «Asistencia Social» como una de las materias cuyas competencias pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas.

19. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.

El artículo 148.1.22.^a dice así: «La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.»

Artículo 27

Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecución de las siguientes materias, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca:

1. El desarrollo de las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.

Véase el artículo 148.1.2.^a de CONS-78, ya citado.

2. El régimen de los montes y aprovechamientos forestales, con especial referencia a los montes vecinales en mano común, montes comunales, vías pecuarias, pastos y régimen de las zonas de montaña.

El artículo 148.1.8.^a de CONS-78 dice así: «Los montes y aprovechamientos forestales.» Asimismo el artículo 149.1.23.^a dice: «Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer

normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.»

3. Instituciones de crédito corporativo público y territorial. Cajas de Ahorro.

El artículo 149.1.11.^a de CONS-78 dice así: «Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.»

4. Ordenación y planificación de la actividad económica regional en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este Estatuto.

El artículo 131 de CONS-78 dice así: «1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.»

También véase el artículo 148.1.13.^a de CONS-78, ya citado, y finalmente el artículo 149.1.13.^a de CONS-78, que dice así: «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.»

5. El régimen minero y energético.

El artículo 149.1.25.^a de CONS-78 determina las «Bases del régimen minero y energético».

6. La investigación científica y técnica en materia de interés para la Comunidad de Madrid.

Véase el artículo 148.1.17.^a de CONS-78, ya citado. El artículo 149.1.15.^a de CONS-78 dice así: «Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.»

7. La sanidad e higiene.

El artículo 148.1.21.^a de CONS-78 determina la «Sanidad e Higiene» como materias cuyas competencias pueden asumir las Comunidades Autónomas.

8. Las especialidades del régimen jurídico-administrativo derivado de las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid.

El artículo 149.1.18.^a de CONS-78 dice así: «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autó-

tico.

determi-
y ener-

técni-
omuni-

S-78, ya
S-78 dice
al de la

termina
rias cu-
s Comu-

nen ju-
de las
omuni-

dice así:
las Ad-
en esta-
en todo
ados un
procedi-
perjuicio
la orga-
es Autó-

nomas; legislación sobre expropiación for-
zosa; legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas y el sistema de
responsabilidad de todas las Administracio-
nes públicas.»

9. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca la Ley Orgánica.

Véase el artículo 148.1.22.^a de CONS-78, ya citado.

10. Las normas adicionales de protección sobre el medio ambiente, para evitar el deterioro de los equilibrios ecológicos, especialmente en lo relativo al aire, aguas, espacios naturales y conservación de la flora, la fauna y los testimonios culturales dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

El artículo 148.1.9.^a de CONS-78 dice así:
«La gestión en materia de protección del medio ambiente.»

Véanse los artículos 149.1.23.^a y 148.1.16.^a de CONS-78, ya citados.

Artículo 28

Corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva de las siguientes materias:

1. Protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes en las aguas del territorio de la Comunidad de Madrid.

Véanse los artículos 148.1.9.^a, 149.1.23.^a y 148.1.16.^a de CONS-78, citados en el epígrafe anterior.

2. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad en el marco de los convenios que, en su caso, puedan celebrarse con el Estado.

Véase el artículo 149.1.28.^a de CONS-78, ya citado.

3. Denominaciones de origen, en colaboración con el Estado.

4. Comercio interior y defensa del consumidor.

Véase el artículo 148.1.12.^a de CONS-78, ya citado. Asimismo el artículo 51 dice así:

«1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.»

5. Industria y servicios, a efectos de impulsar el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid.

6. Cámaras de Comercio, de Industria, de la Propiedad Urbana, Agrarias y otras similares en el marco de lo que establezca la legislación del Estado, reguladora de las Corporaciones de Derecho público.

El artículo 149.1.10.^a de CONS-78 dice así:
«Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.»

7. Estadística para fines de interés de la Comunidad.

El artículo 149.1.31.^a de CONS-78 determina «La estadística para fines estatales» entre las materias de competencia exclusiva del Estado.

Artículo 29

1. Transcurridos cinco años desde la aprobación de este Estatuto, la Comunidad de Madrid, previo acuerdo de su Asamblea, adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales para su aprobación mediante Ley Orgánica.

El artículo 148.2 de CONS-78 dice así: «Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.»

Asimismo el artículo 147.3 de CONS-78 dice: «La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.»

2. Sin necesidad de que transcurra dicho plazo, al anunciarse la presentación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley marco, la Comunidad de Madrid, mediante acuerdo de su Asamblea adoptado con la misma mayoría a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar de las Cortes Generales que se le atribuya la potestad de dictar la correspondiente legislación de desarrollo.

3. En cualquier momento y con la misma mayoría, la Asamblea de Madrid podrá solicitar de las Cortes Generales que mediante Ley Orgánica se le transfieran o deleguen las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

Véase el artículo 150.2 de CONS-78, ya citado.

4. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid podrá asumir las demás competencias que la legislación del Estado reserve a las Comunidades Autónomas o a la de Madrid específicamente.

5. Los procedimientos establecidos en los apartados anteriores se seguirán también para la asunción por la Comunidad de aquellas competencias que, reguladas en este Estatuto, están incluidas en el ámbito del artículo 149 de la Constitución.

Véase el artículo 150.2 de CONS-78, ya citado.

Artículo 30

En relación con la enseñanza, la Comunidad de Madrid asumirá las competencias y funciones que le correspondan en el marco de la legislación general o, en su caso, de las delegaciones que pudieran producirse, fomentando en ambos casos, en su ámbito, la investigación y cuantas actividades favorezcan el bienestar social y el acceso a la cultura de los habitantes de Madrid.

El artículo 27 de CONS-78 dice así: «1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.»

También el artículo 149.1.30.^a de CONS-78 dice así: «Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.»

Artículo 31

1. En materia de medios audiovisuales de comunicación social del Estado, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las potestades y las competencias que le correspondan en los términos y casos establecidos en la Ley Reguladora del Estatuto de Radiodifusión y Televisión.

El artículo 149.1.27.^a de CONS-78 dice así: «Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.»

2. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social en el ámbito de la Comunidad.

Véase el artículo 149.1.27.^a de CONS-78, citado en el epígrafe anterior.

Artículo 32

1. La Comunidad de Madrid podrá celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas, en especial con las limítrofes, para la gestión y prestación de servicios propios de la competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales. Si las Cortes Generales o alguna de las Cámaras manifestaran reparos en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación, el Convenio deberá seguir el trámite previsto en el apartado siguiente. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese manifestado reparos al Convenio, entrará en vigor.

2. La Comunidad de Madrid podrá establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

El artículo 145.2 de CONS-78 dice así: «Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente co-

municación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.»

3. La Comunidad Autónoma de Madrid, por su tradicional vinculación, mantendrá relaciones de especial colaboración con las Comunidades castellanas, para lo cual podrá promover la aprobación de los correspondientes acuerdos y convenios.

Artículo 33

1. La Comunidad de Madrid será informada de la elaboración de los tratados y Convenios internacionales, así como de los proyectos de reglamentación aduanera, en cuanto pudieran afectar a materias de su específico interés.

2. Compete a la Comunidad de Madrid la adopción de las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados y Convenios internacionales en aquellas materias propias de su competencia, según el presente Estatuto.

El artículo 149.1.3.^a determina las «Relaciones internacionales» como materia de competencia exclusiva del Estado.

Artículo 34

El Derecho propio de la Comunidad de Madrid, constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias de competencia plena de la Comunidad Autónoma, es aplicable con preferencia a cualquier otro en el territorio de Madrid. En todo caso, el Derecho estatal tiene carácter supletorio del Derecho propio de Madrid.

Véase el artículo 149.1.18.^a de CONS-78, ya citado. También el artículo 149.3 dice así: «Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.»

TITULO III

Del régimen jurídico

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 35

1. Las competencias de la Comunidad de Madrid se entienden referidas a su territorio.

2. En las materias de su competencia, le corresponde a la Asamblea de Madrid la potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto, correspondiéndole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

3. Las competencias de ejecución de la Comunidad de Madrid llevan implícito la correspondiente potestad reglamentaria para la organización interna de los servicios, la administración y, en su caso, la inspección.

Artículo 36

La Comunidad de Madrid, como ente de Derecho público, tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Su responsabilidad, y la de sus autoridades y funcionarios, procederá y se exigirá en los mismos términos y casos que establezca la legislación del Estado en la materia.

Artículo 37

1. En el ejercicio de sus competencias ejecutivas, la Comunidad de Madrid gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre las que se comprenden:

a) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.

b) La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados, así como el ejercicio de las restantes competencias de la legislación expropiatoria atribuida

a la Administración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la Comunidad de Madrid.

Véase el artículo 149.1.18.^a de CONS-78, ya citado.

c) La potestad de sanción, dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico.

d) La facultad de utilización del procedimiento de apremio.

e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como los privilegios de prelación, preferencia y demás reconocidos a la Hacienda pública para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado, y en igualdad de derechos con las demás Comunidades Autónomas.

f) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación en materia de bienes.

g) La exención de la obligación de prestar toda clase de garantías o cauciones ante los organismos administrativos y ante los jueces o tribunales de cualquier jurisdicción.

2. No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Comunidad de Madrid en materia de su competencia, y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

CAPITULO II

De la Administración

Artículo 38

1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la creación y estructuración de su propia Administración pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado.

Véase el artículo 149.1.18.^a de CONS-78, ya citado.

2. El régimen jurídico de la Administración pública regional y de sus funcionarios será regulado mediante Ley de la Asamblea, de conformidad con la legislación básica del Estado.

Idem.

Artículo 39

La Comunidad de Madrid ejercerá sus funciones administrativas a través de los órganos, organismos y entidades que se establezcan dependientes del Consejo de Gobierno, pudiendo delegar dichas funciones en los municipios y demás entidades locales reconocidas en este Estatuto, si así lo autoriza una Ley de la Asamblea que fijará las oportunas formas de control y coordinación.

Artículo 40

En los términos previstos en este Estatuto, y de acuerdo con la legislación básica del Estado, la Comunidad de Madrid, mediante Ley, podrá crear otras entidades de carácter institucional para fines específicos.

Artículo 41

1. Las Leyes de la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad de Madrid,

el cual ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad» y en el «Boletín Oficial del Estado», entrando en vigor el día de su publicación en aquél.

2. Los reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno serán publicados, por orden del Presidente del Consejo, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 42

El Consejo de Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos o términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El artículo 161.1.a) de CONS-78 dice así:
«1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con ran-



go de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de la cosa juzgada.»

CAPITULO III

Del control de la Comunidad de Madrid

Artículo 43

Las Leyes de la Asamblea estarán excluidas de su revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa y sujetas únicamente al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.

El artículo 153.a) de CONS-78 dice así: «El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.»

Artículo 44

Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos o administrativos de la Comunidad de Madrid, así como el

control de la legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, serán, en todo caso, controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 153.c) de CONS-78 dice así: «Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.»

Artículo 45

1. El control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma de Madrid se ejercerá por el Tribunal de Cuentas del Estado.

El artículo 153.d), referente al control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, determina que se ejercerá: «Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.»

2. El informe del Tribunal de Cuentas será remitido a las Cortes Generales, así como a la Comunidad Autónoma de Madrid.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica

prevista en el artículo 136.4 de la Constitución.

El artículo 136 de CONS-78 dice así: «1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.»

Finalmente, dentro de este capítulo III del Estatuto de Autonomía, debe tenerse en cuenta el artículo 155 de CONS-78, que dice así: «1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias

para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.»

TITULO IV

De la organización judicial

Artículo 46

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia es el órgano jurisdiccional ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.1 de la Constitución.

El artículo 123.1 de CONS-78 dice así: «El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.»

El segundo párrafo del artículo 152.1 de CONS-78 dice así: «Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.»

Artículo 47

Los órganos jurisdiccionales que ejercen su jurisdicción en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid extenderán su competencia:

- a) En el ámbito civil, penal y social, a todas las instancias y grados, con ex-

cepción de los recursos de casación y revisión.

b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos contra actos o disposiciones de las Administraciones públicas y contra las resoluciones judiciales que no estén atribuidas a las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional.

En todo caso, conocerán, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos que se deduzcan contra actos y disposiciones administrativas de los órganos de la Comunidad de Madrid.

c) A las cuestiones de competencia que se susciten entre los mismos.

En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación o el que corresponda, según las leyes del Estado, y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y jurisdicción entre los Tribunales con sede en la Comunidad Autónoma y los del resto de España.

Artículo 48

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en los términos previstos en su Ley Orgánica. El Presidente de la Comunidad ordenará la publicación de dicho nombramiento en el «Boletín Oficial de Madrid».

2. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 122.1 y 2 de CONS-78 dice así:
«1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. Corresponde al Estado, de conformidad con las leyes generales, la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal.

El artículo 124, apartados 1, 2 y 3, de CONS-78 dice así: «1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.»

Artículo 49

A instancias del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes en Madrid de Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia,

de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Véase el artículo 122.1 y 2 de CONS-78, ya citado.

Artículo 50

En relación con la Administración de Justicia, y exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad:

1. Al Consejo de Gobierno, ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno de la Nación.
2. A la Asamblea, participar en la delimitación de las demarcaciones territoriales en la Comunidad y en la localización de la sede de su capitalidad.

TITULO V

Economía y Hacienda

Artículo 51

La Comunidad de Madrid, dentro de los principios de coordinación con las Haciendas estatal y local, goza de autonomía financiera, es titular de bienes de dominio público y de patrimonio y hacienda propios, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y demás normas que la desarrollan.

Artículo 52

1. Son bienes de la Comunidad de Madrid:

a) Los que integran el patrimonio de la Diputación Provincial de Madrid en el momento de aprobarse el Estatuto.

b) Los afectos a servicios traspasados a la Comunidad de Madrid.

c) Los que adquiriese la Comunidad por cualquier título jurídico válido.

2. La Comunidad de Madrid tiene plena capacidad para adquirir, administrar y enajenar los bienes que integran su patrimonio.

3. Una Ley de la Asamblea regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad, su administración, defensa y conservación en el marco de la legislación básica del Estado.

Artículo 53

La Hacienda de la Comunidad de Madrid se constituye con:

El artículo 31.1 de CONS-78 dice así: «1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.»

También véase el artículo 131.1 y 2 de CONS-78, ya citado. Asimismo el artículo 149.1.14.ª dice: «Hacienda General y Deuda del Estado», refiriéndose a las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva. Finalmente, el artículo 156.1 de CONS-78 dice así: «Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.»

1. Los rendimientos de sus propios tributos.

2. Los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre impuestos estatales, en los términos que establezca la ley reguladora de los mismos.

3. Las asignaciones complementarias que se establezcan, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado con destino a la Comunidad de Madrid.

4. Las participaciones en los impuestos estatales no cedidos.

5. Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.

6. Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros fondos destinados a favorecer el desarrollo regional.

7. Los rendimientos derivados del patrimonio de la Comunidad de Madrid y los ingresos de Derecho privado, herencias, legados y donaciones.

8. Los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

9. El producto de las operaciones de crédito.

10. Cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las leyes del Estado.

El artículo 157 de CONS-78 dice así: «1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

- a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
- e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.»

También el artículo 158.1 de CONS-78 dice así: «1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades esta-

tales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.»

Artículo 54

1. Cuando se complete el traspaso de servicios y, en todo caso, al cumplirse el sexto año de vigencia de este Estatuto, la participación anual en los ingresos del Estado, citado en el número 4 del artículo 52, se negociará de acuerdo con las bases establecidas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y con un adecuado soporte estadístico.

2. La fijación de un nuevo porcentaje de participación podrá revisarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid y que anteriormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años de la puesta en vigor, sea solicitada dicha revisión por el Estado o por la Comunidad de Madrid.

3. El porcentaje de participación se establecerá por ley.

Artículo 55

1. La Comunidad de Madrid, mediante acuerdo de la Asamblea, podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, en los ámbitos nacional y extranjero, para financiar operaciones de inversión.

2. El volumen y las características de las operaciones de crédito y emisión de deuda pública se establecerán de acuerdo con la ordenación de la política crediticia establecida por el Estado.

El artículo 135 de CONS-78 dice así: «1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modi-

ficación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.»

También véase el artículo 149.1.14.^a de CONS-78, ya citado.

3. Los títulos de deuda que se emitan tendrán consideración de fondos públicos a todos los efectos.

4. El Consejo de Gobierno podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería. La Ley de Presupuestos de la Comunidad regulará anualmente las condiciones básicas de estas operaciones.

Véase el artículo 148.1.13.^a de CONS-78, ya citado.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 56

1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, así como el conocimiento de las reclamaciones relativas a los mismos, co-

responderán a la Comunidad de Madrid, que dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

2. En el caso de los impuestos cuyos rendimientos hubiesen sido cedidos, el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado, la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

3. La gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de los demás impuestos del Estado recaudados en el ámbito de la Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la Delegación que la Comunidad Autónoma pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecer-

se, especialmente, cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

El artículo 156.2 de CONS-78 dice así:
«2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.»

Véase el artículo 157.3 de CONS-78.

Artículo 57

La Comunidad de Madrid colaborará con el Estado y los Ayuntamientos en todos los aspectos relativos al régimen fiscal y financiero.

Artículo 58

La Comunidad de Madrid gozará del mismo tratamiento fiscal que la ley establezca para el Estado.

Véase el artículo 156.1 de CONS-78, ya citado.

Artículo 59

Se regularán necesariamente, mediante Ley de la Asamblea de Madrid, las siguientes materias:

a) El establecimiento, la modificación y supresión de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, y de las exenciones y bonificaciones que les afecten.

El artículo 133.2 de CONS-78 dice así: «Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.»

b) El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

c) El régimen general presupuestario de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los principios de la legislación del Estado.

Artículo 60

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:

- a) Aprobar los Reglamentos generales de sus propios tributos.
- b) Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos, de acuerdo con los términos de dicha cesión.

Artículo 61

1. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del Presupuesto de la Comunidad y a la Asamblea su examen, enmienda, aprobación y control. El proyecto de Ley del Presupuesto anual deberá presentarse con dos meses de antelación a la expiración del ejercicio siguiente.

2. El Presupuesto será único, tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad y de los organismos, instituciones y empresas de ella dependientes. Se consignará

en el Presupuesto el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad.

Artículo 62

En las empresas o entidades financieras de carácter público cuyo ámbito de actuación se extienda fundamentalmente a la provincia de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad, de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado, designará las personas que han de representarle en los órganos de Administración de aquéllas.

Artículo 63

1. La Comunidad de Madrid podrá ser titular de empresas públicas y entidades de crédito y ahorro, como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia, de conformidad con el artículo 27 del presente Estatuto.

2. La Comunidad elaborará un programa anual de actuación del sector público económico, cuyas líneas generales

estarán coordinadas con la actividad presupuestaria anual.

Téngase en cuenta el artículo 148.1.13.^a de CONS-78, ya citado.

TITULO VI

Reforma del Estatuto

Artículo 64

1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno o a la Asamblea de Madrid, a propuesta de una tercera parte de sus miembros o de dos tercios de los municipios de la Comunidad, cuya población represente la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid.

La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de la Asamblea por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por la Asamblea o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación de la Asamblea hasta que haya transcurrido un año.

El artículo 147.3 de CONS-78 dice así: «La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.»

El artículo 152.2 dice: «2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. Se cede a la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en el número 3 de la presente Disposición, el rendimiento de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto.

b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

c) Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

d) La imposición general sobre las ventas en su fase minorista.

e) Los impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.

f) Las tasas y demás exacciones sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de alguno de esos tributos implicará la extinción o modificación de la cesión.

2. El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad de Madrid, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto.

3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta mencionada en la Disposición transitoria segunda, que, en todo caso, los re-

ferirá a rendimientos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El Gobierno tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto de ley.

Segunda

1. Las primeras elecciones a la Asamblea tendrán lugar antes del 31 de mayo de 1983, y serán convocadas por el Gobierno de la Nación.

2. Las primeras elecciones a la Asamblea, así como las sucesivas en tanto no se haya dictado la Ley que prevé el artículo 11 del presente Estatuto, se celebrarán de acuerdo con el sistema que rija para la elección al Congreso de los Diputados.

3. En todo lo no previsto por el presente Estatuto, y para las primeras elecciones, será de aplicación el Real Decreto-ley 20/77, de 18 de marzo, con excepción del apartado 2.º, letra a), del artículo 4 del mismo.

4. El vigésimo quinto día de proclamados los resultados definitivos de las elecciones o el siguiente hábil si aquél

no lo fuera se constituirá la Asamblea General, mediante convocatoria del Gobierno de la Nación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Mientras las Cortes Generales no elaboren la legislación de bases a que este Estatuto se refiere y la Asamblea no dicte normas sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias. Todo ello sin perjuicio de su ejecución por la Comunidad en los casos así previstos.

Asimismo, la Comunidad podrá desarrollar legislativamente los principios o bases que se contengan en el Derecho estatal vigente en cada momento, en los supuestos previstos en este Estatuto, interpretando dicho Derecho conforme a la Constitución.

Véanse los artículos 149.3 y 150.1 y 2 de CONS-78. También el apartado 3 de dicho artículo dice: «El Estado podrá dictar leyes

que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.»

Segunda

El traspaso de los servicios inherentes a las competencias que según el presente Estatuto corresponden a la Comunidad de Madrid se hará de acuerdo con las bases siguientes:

1. En el plazo máximo de un mes desde el nombramiento del Presidente por el Rey se nombrará una Comisión Mixta encargada de inventariar los bienes y derechos del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad, de concretar los servicios y funcionarios que deban traspasarse y de proceder a la adaptación, si es preciso, de los que pasen a la competencia de la Comunidad.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la Nación y la

Asamblea, y ella misma establecerá sus normas de funcionamiento.

3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno de la Nación, que los aprobará mediante Real Decreto, figurando aquéllos como anexos al mismo. Serán publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» y en el «Boletín Oficial del Estado», adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.

4. La Comisión Mixta establecerá los calendarios y plazos para el traspaso de cada servicio. En todo caso, la referida Comisión deberá determinar en un plazo de dos años desde la fecha de su constitución el término en que habrá de completarse el traspaso de todos los servicios que correspondan a la Comunidad, de acuerdo con este Estatuto.

5. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del



Estado los traspasos de medios personales, financieros o materiales que debe recibir la Comunidad de Madrid. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo con la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.

6. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad de Madrid la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificación contendrá los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.

7. El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de los locales para oficinas públicas de los servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato.

Tercera

1. Serán respetados los derechos adquiridos de cualquier orden o naturaleza que en los momentos de las diversas

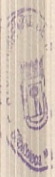
transferencias tengan los funcionarios y personas adscritos a la Diputación Provincial de Madrid, a los servicios estatales o a los de otras instituciones públicas objeto de dichas transferencias.

2. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la legislación general del Estado y a la particular de la Comunidad de Madrid en el ámbito de su competencia.

Cuarta

1. La Diputación Provincial de Madrid queda integrada en la Comunidad de Madrid a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto y gestionará los intereses generales de la Comunidad que afectan al ámbito local hasta la constitución de los órganos de autogobierno comunitarios, ajustándose a sus actuales competencias y programas económicos y administrativos, y aplicando en el ejercicio de sus funciones, de forma armónica, la legislación local vigente y la estatal, con prevalencia de esta última ordenación.

2. Una vez constituidos los órganos



de autogobierno comunitario, quedarán disueltos de pleno derecho los órganos políticos de la Diputación Provincial de Madrid, la cual cesará en sus funciones. La Comunidad de Madrid asumirá todas las competencias, medios y recursos que según la ley correspondan a la Diputación Provincial de Madrid, y se subrogará en las relaciones jurídicas que se deriven de las actividades desarrolladas por aquélla.

El artículo 141.1 y 2 de CONS-78 dice así:
«1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.»

Quinta

En lo relativo a televisión, la aplicación del artículo 31 del presente Estatuto supone que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Comunidad de

Madrid la utilización de un tercer canal, de titularidad estatal, para su emisión en el ámbito territorial de la Comunidad en los términos que prevea la citada concesión.

Sexta

1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas en este Estatuto para la Comunidad Autónoma de Madrid o, en cualquier caso, hasta que se hayan cumplido seis años desde su entrada en vigor, el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la Comunidad Autónoma en el momento de la transferencia.

2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la Disposición transitoria segunda adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación en ingresos del Estado, previsto en el artículo 54 de este Estatuto. El método a seguir tendrá en

cuenta tanto los costes directos como los indirectos de los servicios, así como los gastos de inversión que correspondan.

3. La Comisión Mixta de Transferencias fijará el citado porcentaje mientras dure el período transitorio con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes.

4. A partir del método fijado en el apartado 2 anterior, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorando por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos I y II del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados.

El artículo 158.2 de CONS-78 dice así: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.»

S
S
a-
S
a-
a-
el
el
n
el
S
i-
al
S-
n
S
el
S-
n
os
n-
n-
os
ri-
as
n

el
n
el
s
i-
al
s-
n
s
el
s-

n
os
n-
n-
os
ri-
as
n

n
 os
 n-
 n-
 os
 ri-
 as
 n

INDICE ANALITICO

- ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION, art. 12.4.
- ACCESO A LA CULTURA, art. 30.
- ACUERDOS DE COOPERACION, arts. 14.14 y 32.
- ACUICULTURA, art. 26.9.
- ADMINISTRACION DE JUSTICIA, arts. 46-50.
- ADMINISTRACION LOCAL, art. 27.1.
- ADMINISTRACION PUBLICA, arts. 38-42.
- AEROPUERTOS DEPORTIVOS, art. 26.6.
- AGRICULTURA, art. 26.7.
- AGRUPACION DE MUNICIPIOS, art. 3.2 y 3.
- AGUAS MINERALES, art. 26.8.
- AGUAS TERMALES, art. 26.8.
- ALTERACIONES DE TERMINOS MUNICIPALES, artículo 26.2.
- AMPLIACION DE COMPETENCIAS, art. 29.1.
- APROBACION DE CUENTAS, art. 14.4.
- APROBACION DE PRESUPUESTOS, art. 14.4.
- APROVECHAMIENTOS FORESTALES, art. 27.2.
- APROVECHAMIENTOS HIDRAULICOS, art. 26.8.
- ARCHIVOS, arts. 26.13 y 28.2.
- ARTESANIA, art. 26.12.
- ASAMBLEA DE MADRID, arts. 8.1 y 9-16.
- ASISTENCIA SOCIAL, art. 26.18.
- AUTONOMIA FINANCIERA, art. 51.

- BANDERA, art. 4.
- BELLAS ARTES, art. 26.13.
- BIBLIOTECAS, arts. 26.13 y 28.2.

BIENES, arts. 37.1.f) y 52.
BIENESTAR SOCIAL, art. 30.

CAJAS DE AHORRO, arts. 27.3 y 63.1.
CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA, art. 28.6.
CAMARAS AGRARIAS, art. 28.6.
CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, art. 28.6.
CANALES, art. 26.8.
CARRETERAS, art. 26.5.
CAZA, art. 26.9.
CESE DEL CONSEJO DE GOBIERNO, art. 23.
CESION DE TRIBUTOS, Disp. Ad. 1.^a
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL, art. 11.1.
COMERCIO INTERIOR, art. 28.4.
COMISION MIXTA, Disp. Trans. 2.^a
COMPETENCIAS, arts. 25-34.
COMPOSICION DE LA ASAMBLEA, art. 10.2.
COMPOSICION DEL CONSEJO, art. 21.2.
CONSEJEROS, arts. 21, 22 y 24.
CONSEJO DE GOBIERNO, arts. 8.1 y 21-24.
CONSERVATORIOS DE MUSICA, art. 26.13.
CONTAMINACION DEL AGUA, art. 28.1.
CONTRIBUCIONES ESPECIALES, art. 59.a).
CONTROL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, arts. 43-45.
CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, art. 14.3.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, art. 43.
CONTROL ECONOMICO, art. 45.
CONVENIOS DE COOPERACION, arts. 14.13 y 32.
CONVENIOS INTERNACIONALES, art. 33.
CONVENIOS CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS, arts. 14.13 y 32.
COOPERACION CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS, arts. 14.13 y 32.
CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, art. 28.6.
CREDITO CORPORATIVO, art. 27.3.
CUESTION DE CONFIANZA, arts. 19 y 23.
CULTURA, arts. 26.15, 27.10 y 30.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR, art. 28.4.
DENOMINACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, artículo 1.2.
DENOMINACION DE ORIGEN, art. 28.3.
DEPORTE, art. 26.17.
DERECHO DE AUTOGOBIERNO, art. 1.1.
DERECHO SUPLETORIO, art. 34 y Disp. Trans. 1.^a
DERECHO MADRILEÑO, art. 34.
DESARROLLO ECONOMICO, art. 26.11.

DESARROLLO LEGISLATIVO, arts. 25.1.b), 27 y 28.
 DEUDA PUBLICA, art. 55.
 DIPUTACION PROVINCIAL, Disp. Trans. 4.^a
 ECOLOGIA, art. 27.10.
 EJECUCION FORZOSA, art. 37.1.a).
 ELECCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GO-
 BIERNO, art. 14.9.
 ELECCIONES A DIPUTADOS, arts. 10.3 y 11 y Disp. Adi-
 cional 2.^a
 EMPRESAS PUBLICAS, arts. 62 y 63.
 ENERGIA, art. 27.5.
 ENSEÑANZA, art. 30.
 ENTIDADES DE CREDITO, art. 63.1.
 ESCUDO, art. 4.
 ESTADISTICA, art. 28.7.
 EXPROPIACION FORZOSA, art. 37.1.b).
 FERIAS INTERIORES, art. 26.10.
 FERROCARRILES, art. 26.5.
 FISCALES, art. 48.3.
 FUNCIONARIOS, art. 38.2 y Disps. Trans. 2.^a.1 y 3.^a
 FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA, art. 13.
 GANADERIA, art. 26.7.
 GESTION DE TRIBUTOS, art. 56.
 HACIENDA LOCAL, art. 57.
 HACIENDA REGIONAL, arts. 51-63.
 HEMEROTECAS, art. 26.13.
 HIGIENE, art. 27.7.
 HIMNO, art. 4.
 IMPOSICION SOBRE VENTAS AL MENOR, Disp. Adi-
 cional 1.^a.d).
 IMPUESTO SOBRE EL LUJO, Disp. Trans. 7.^a
 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO, Disp. Adi-
 cional 1.^a.a).
 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, Disp. Ad. 1.^a.c).
 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES, Disp. Ad. 1.^a.b).
 IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDIDO, Disp. Transi-
 toria 7.^a
 IMPUESTOS, arts. 53 y 59.a).
 IMPUESTOS ESTATALES CEDIDOS, art. 53.5.
 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS, Disp. Ad. 1.^a.e).
 INCOMPATIBILIDAD DE LOS CONSEJEROS, art. 22.1.
 INCOMPATIBILIDAD DE LOS DIPUTADOS, art. 12.1.

INDUSTRIA, art. 28.5.
INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES, art. 37.1.e).
INGRESOS, art. 53.
INICIATIVA LEGISLATIVA, arts. 14.11 y 15.
INSPECCION DE TRIBUTOS, art. 56.
INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO, art. 26.1.
INTERDICTOS, art. 37.2
INVESTIDURA DEL PRESIDENTE, art. 18.
INVESTIGACION, arts. 26.15 y 30.
INVESTIGACION CIENTIFICA, art. 27.6.
INVESTIGACION TECNICA, art. 27.6.
INVIOLEABILIDAD DE LOS DIPUTADOS, art. 12.2 y 3.
INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO, art. 8.

JUECES, arts. 48.2 y 49.
JURISDICCION CIVIL, art. 47.a).
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, artículos 43, 44 y 47.b).
JURISDICCION PENAL, art. 47.a).
JURISDICCION SOCIAL, art. 47.a).

LEYES DE LA ASAMBLEA, art. 41.
LIQUIDACION DE TRIBUTOS, art. 56.

MADRILEÑOS, art. 7.
MAGISTRADOS, arts. 48.2 y 49.
MEDIO AMBIENTE, art. 27.10.
MEDIOS AUDIOVISUALES, art. 31.1.
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, arts. 14.7 y 31.2.
MINAS, art. 27.5.
MINISTERIO FISCAL, art. 48.3.
MOCION DE CENSURA, arts. 20 y 23.
MONTES, art. 27.2.
MONTES COMUNALES, art. 27.2.
MULTAS, art. 53.8.
MUNICIPIOS, art. 3.
MUSEOS, arts. 26.13 y 28.2.

OBRAS PUBLICAS, art. 26.4.
OCIO, art. 26.17.
OPERACIONES DE CREDITO, arts. 53.9 y 55.
ORDENACION DEL TERRITORIO, art. 26.3.

PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD, art. 53.
PATRIMONIO MONUMENTAL, art. 26.14.
PESCA, art. 26.9.
PLANES ECONOMICOS, art. 14.5.

PLANIFICACION ECONOMICA, arts. 14.5 y 27.4.
 POLICIAS LOCALES, art. 27.9.
 POTESTAD EJECUTIVA, arts. 21 y 25.3.
 POTESTAD LEGISLATIVA, arts. 9, 14.1 y 2, 16, 25, 26 y 35.2.
 POTESTAD REGLAMENTARIA, arts. 21.1, 25.2 y 35.3.
 POTESTAD SANCIONADORA, art. 37.1.c).
 PRENSA, art. 31.2.
 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, art. 13.1.
 PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, arts. 8.1 y 17-20.
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, art. 48.
 PRESUNCION DE LEGITIMIDAD, art. 37.1.a).
 PRESUPUESTOS, arts. 14.4, 59.c) y 61.
 PROCEDIMIENTO DE APREMIO, art. 37.1.d).
 PROCEDIMIENTO ELECTORAL, art. 11.3.
 PROTECCION DE EDIFICIOS, art. 26.19.
 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, arts. 27.10 y 28.1.
 PROTECCION DE LA NATURALEZA, arts. 27.10 y 28.1.
 PUERTOS LACUSTRES, art. 26.6.

 RADIODIFUSION, art. 31.1.
 RECARGOS SOBRE IMPUESTOS ESTATALES, arts. 53.2 y 59.b).
 RECAUDACION DE TRIBUTOS, art. 56.
 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, arts. 14.10 y 42.
 RECURSO DE REVISION, art. 47.a).
 RECURSO DE CASACION, art. 47.a).
 REFORMA DEL ESTATUTO, art. 64.
 REFORMA TRIBUTARIA, art. 54.2.c).
 REGADIOS, art. 26.8.
 REGIMEN ESPECIAL DE LA VILLA, art. 6.
 REGIMEN JURIDICO-ADMINISTRATIVO, arts. 27.8 y 35-42.
 REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA, art. 13.2.
 RELACION CON LAS COMUNIDADES CASTELLANAS, artículo 32.3.
 RESPONSABILIDAD, art. 36.
 RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS, art. 24.
 RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE, arts. 20 y 24.

 SANIDAD, art. 27.7.
 SECRETARIOS JUDICIALES, art. 49.
 SECTOR PUBLICO, art. 63.2.
 SEDE DE LAS INSTITUCIONES, art. 5.
 SENADORES, art. 14.12.

SESIONES DE LA ASAMBLEA, art. 13.4 y 6.
SOLIDARIDAD, art. 1.3.

TASAS, art. 59.a).

TASAS SOBRE EL JUEGO, Disp. Ad. 1.ª.f).

TELEVISION, art. 31.1 y Disp. Trans. 5.ª

TERMINOS MUNICIPALES, art. 26.2.

TERRITORIO, art. 2.

TRANSPORTE POR CABLE, art. 26.5.

TRANSPORTES, art. 26.5.

TRATADOS INTERNACIONALES, art. 33.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, arts. 14.10, 42 y 43.

TRIBUNAL DE CUENTAS, art. 45.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, art. 46.

TRIBUTOS, arts. 14.8 y 53.1.

TURISMO, art. 26.16.

URBANISMO, art. 26.3.

VERTIDOS INDUSTRIALES, art. 28.1.

VIAS PECUARIAS, art. 27.2.

VIGILANCIA DE INSTALACIONES, art. 26.19.

VIVIENDA, art. 26.3.

ZONAS DE MONTAÑA, art. 27.2.

SUMARIO

	<i>Págs.</i>
Estudio preliminar por Enrique Orduña Rebollo.	7
ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
TITULO PRELIMINAR	17
TITULO I. De las Instituciones y Gobierno de la Comunidad	25
Capítulo I. De la Asamblea de Madrid	25
Capítulo II. Del Presidente de la Comunidad de Madrid	38
Capítulo III. Del Consejo de Gobierno	42
TITULO II. De las competencias de la Comunidad	45
TITULO III. Del régimen jurídico	68
Capítulo I. Disposiciones generales	68
Capítulo II. De la Administración	71
Capítulo III. Del control de la Comunidad de Madrid	74
TITULO IV. De la organización judicial	77
TITULO V. Economía y Hacienda	83
TITULO VI. Reforma del Estatuto	95
DISPOSICIONES ADICIONALES	96
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	99
DISPOSICION FINAL	107
INDICE ANALITICO	109

SUMARIO

SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1	TASAS, art. 25.
2	TASAS SOBRE EL USO DE LAS AGUAS, art. 26.
3	TELEVISION, art. 27 y Disp. Trans. 1.
4	TERMINOS MUNICIPALES, art. 28.
5	TERRITORIO, art. 29.
6	TRANSPORTE POR CARRETERA, art. 30.
7	TRANSPORTE, art. 31.
8	TRATADO DE TRANSACCIONES, art. 32.
9	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, art. 33 y 34.
10	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 35.
11	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 36.
12	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 37.
13	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 38.
14	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 39.
15	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 40.
16	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 41.
17	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 42.
18	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 43.
19	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 44.
20	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 45.
21	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 46.
22	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 47.
23	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 48.
24	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 49.
25	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 50.
26	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 51.
27	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 52.
28	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 53.
29	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 54.
30	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 55.
31	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 56.
32	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 57.
33	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 58.
34	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 59.
35	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 60.
36	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 61.
37	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 62.
38	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 63.
39	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 64.
40	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 65.
41	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 66.
42	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 67.
43	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 68.
44	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 69.
45	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 70.
46	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 71.
47	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 72.
48	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 73.
49	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 74.
50	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 75.
51	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 76.
52	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 77.
53	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 78.
54	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 79.
55	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 80.
56	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 81.
57	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 82.
58	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 83.
59	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 84.
60	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 85.
61	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 86.
62	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 87.
63	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 88.
64	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 89.
65	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 90.
66	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 91.
67	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 92.
68	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 93.
69	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 94.
70	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 95.
71	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 96.
72	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 97.
73	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 98.
74	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 99.
75	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 100.
76	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 101.
77	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 102.
78	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 103.
79	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 104.
80	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 105.
81	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 106.
82	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 107.
83	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 108.
84	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 109.
85	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 110.
86	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 111.
87	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 112.
88	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 113.
89	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 114.
90	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 115.
91	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 116.
92	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 117.
93	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 118.
94	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 119.
95	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 120.
96	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 121.
97	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 122.
98	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 123.
99	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 124.
100	TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD, art. 125.

En
Est
DR
TH
TH
TH
C
C
C
C
TH
TH
TH
C
C
C
C
TH
TH
TH
TH
DIS
DIS
DIS
IN



Ayuntamiento de Madrid

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid